INE/CG209/2017

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-10/2017, INTERPUESTO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA COMO INE/CG808/2016 RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL QUINCE, APROBADA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS

ANTECEDENTES

I. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución **INE/CG808/2016** respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos el Partido Revolucionario Institucional, correspondientes al ejercicio dos mil quince.

II. **Recurso de apelación.** Inconforme con la resolución referida en el antecedente anterior, el veinte de diciembre de dos mil dieciséis, el Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución **INE/CG808/2016**, el cual fue recibido por la Sala Superior el diez de enero de dos mil diecisiete, acordándose la integración del expediente identificado con la clave alfanumérica **SUP-RAP-10/2017**.

III. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el medio referido en sesión pública celebrada el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, determinando en sus Puntos Resolutivos, lo siguiente:

“(…)

ÚNICO. *Se revoca la sanción correspondiente a la conclusión 18 (dieciocho) de la resolución impugnada, para los efectos previstos en la parte final de esta ejecutoria.*

“(…)”

VI. Es trascendente precisar que si bien el recurso de apelación **SUP-RAP-10/2017**, tuvo por efectos únicamente revocar la Resolución **INE/CG808/2016**, por lo que hace a la conclusión 18, correspondiente al Considerando **18.1.1, inciso b)**, Resolutivo **PRIMERO** correspondiente al Comité Ejecutivo Nacional; el Dictamen Consolidado identificado con el número **INE/CG807/2016**, forma parte integral de la motivación de la Resolución que se acata, motivo por el cual se procede a su modificación; por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c) y d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes Anuales de Ingreso y Gastos del Partido Revolucionario Institucional, correspondientes al ejercicio dos mil quince.

2. Que el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar, en lo que fue materia de impugnación la conclusión 18, de la Resolución **INE/CG808/2016**; no obstante, como se ha señalado previamente, el Dictamen Consolidado **INE/CG807/2016** al formar parte integral de la motivación de la resolución en cita, se modifica para los efectos precisados en el presente Acuerdo.

Consecuentemente, con la finalidad de dar cumplimiento al mismo, se procede a modificar la parte conducente del Dictamen Consolidado y Resolución en cita.

3. Que por lo anterior y en atención a lo establecido en los Considerandos **TERCERO** y **CUARTO** de la sentencia **SUP-RAP-10/2017**, en relación al **estudio de fondo y efectos** de la misma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe:

“(…)

TERCERO. Estudio de fondo de la litis. *Por cuestión de método, los conceptos de agravio se analizarán en orden distinto al planteado por el recurrente, lo que no genera agravio al recurrente.*

(…)

Al respecto se analizarán primero los motivos de disenso en los que se impugnan conclusiones vinculadas con faltas formales y posteriormente el relativo a la falta sustancial.

(…)

2. Falta sustancial.

Finalmente, en el concepto de agravio relativo a la sanción con motivo de la conclusión 18 (dieciocho), el partido político recurrente aduce que, de manera errónea, la autoridad responsable consideró que omitió entregar comprobantes con requisitos fiscales por \$440,766.66 (cuatrocientos cuarenta mil setecientos sesenta y seis mil (sic) pesos 66/100).

Al respecto, el recurrente sostiene que la documentación sí se entregó debidamente como anexo al escrito con clave SFA/032/16, de trece de octubre de dos mil dieciséis, mismo que se formuló como respuesta al segundo oficio de notificación de errores y omisiones identificado con la clave INE/UTF/DAF/21509/16, de trece de octubre de dos mil dieciséis, la cual, asegura, se detalló en el anexo 1 (uno) del Acta de entrega recepción correspondiente, en la carpeta ‘3/4’, apartado 18 (dieciocho), en la que se hace mención de las cuarenta y seis pólizas observadas y sancionadas.

En este sentido, al considerar como un gasto no comprobado, indebidamente se le sancionó, imponiéndole una multa equivalente al cien por ciento del monto involucrado.

(…)

Mediante el oficio **INE/UTF/DA-F/21509/16**, de seis de octubre de dos mil dieciséis, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral notificó al Partido Revolucionario Institucional la segunda vuelta de errores y omisiones al informe anual de ingresos y gastos correspondiente al dos mil quince, presentado por el Comité Ejecutivo Nacional.

(...)

En respuesta al oficio antes señalado, el Partido Revolucionario Institucional remitió el escrito identificado con la clave **SFA/032/16**, de trece de octubre de dos mil dieciséis, con sellos de recepción de la Dirección de Auditoría Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros, de la Unidad Técnica de Fiscalización de esa fecha; así como de la Oficialía de Partes de la citada Unidad Técnica del inmediato día dieciocho, con la leyenda en manuscrito 'con acta de entrega'.

En el particular, del citado escrito se advierte que el partido político ahora recurrente dio respuesta en los términos siguientes:

'Por lo que respecta a las pólizas señaladas con (2) en la columna de 'ref' de su Anexo 1 al presente oficio en Apartado 18, se remiten nuevamente 46 pólizas de egresos anexas a su comprobante de pago, así como recibos CFDI de honorarios asimilados a sueldos en original por el periodo 01 al 31 de enero de 2015 mismas que se detallan en relación anexa.'

Con motivo de la presentación del escrito SFA/032/16, se elaboró el ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS MEDIANTE OFICIO INE/UTF/DA-F/21509/16 POR LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DEL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2015, en la que se precisa que la documentación entregada se detalla en el Anexo 1.

En el Anexo 1 del acta entrega-recepción, se presenta un cuadro que, en la fila que interesa, contiene los datos siguientes:

CARPETA	APARTADO	CONTENIDO
3/4	18	46 pólizas con documentación soporte

(...)

Como se puede advertir, la autoridad responsable impuso una sanción al Partido Revolucionario Institucional por omitir presentar los comprobantes con requisitos fiscales por un monto total de \$440,766.66 (cuatrocientos cuarenta mil setecientos sesenta y seis pesos 66/2 100 (sic) m.n.).

*No obstante, conforme al Acta de entrega-recepción antes mencionada, se advierte que el partido político recurrente presentó **cuarenta y seis pólizas con documentación soporte**; sin que la autoridad responsable hubiera precisado la documentación presentada como anexo a cada una de las pólizas que fueron motivo del requerimiento, así como el número de fojas en cada caso, ni el total de todas ellas.*

En este sentido, es que esta Sala Superior considera que asiste razón al recurrente, toda vez que era deber de la autoridad responsable precisar detalladamente la documentación que recibía, máxime que en el escrito identificado con la clave SFA/032/16, mediante el cual se desahogó el requerimiento, el partido político manifestó expresamente que presentaba nuevamente las cuarenta y seis pólizas de egresos anexas a su comprobante de pago, así como recibos CFDI, entre otras documentales.

(...)

Así las cosas, esta Sala Superior considera que, en el caso, la Unidad Técnica de Fiscalización, al recibir el escrito para subsanar errores y omisiones, debía detallar los anexos que recibió, es decir, el tipo de documentos y el total de fojas recibidas, mientras que el Consejo General tenía el deber de valorar los documentos que hubieran sido entregados, cuestión que no se satisfizo, por lo que asiste razón al Partido Revolucionario Institucional en cuanto a que indebidamente fue sancionado.

CUARTO Efectos. *Al haber resultado fundado el tercero concepto de agravio en estudio, lo conducente es revocar la sanción correspondiente a la conclusión 18 (dieciocho) de la resolución impugnada, para efecto de que la autoridad responsable precise la documentación que le fue entregada por el partido político recurrente y emita una nueva determinación valorando tales constancias.*

(...)"

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica **SUP-RAP-10/2017**.

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales.

Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país.

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización.

Bajo esta tesis, la multa que en su caso se imponga en el presente acatamiento originalmente se calcula con base en el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en dos mil quince, en atención al año en que sucedieron los hechos investigados, equivalente a **\$70.10** (setenta pesos 10/100 M.N.), no obstante el resultado final de la sanción a imponer en salarios mínimos se convertirán en Unidad de Medida y Actualización vigente en dos mil diecisiete, equivalente a **\$75.49** (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.) en la individualización e imposición de la sanción que en derecho corresponda.

Sirve de apoyo a la referida conversión, la Tesis **LXXVII/2016** emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro

MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.

5. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto a sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga.

En este sentido, mediante Acuerdo **INE/CG623/2016** aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, se determinó como monto del financiamiento para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes del Partido Revolucionario Institucional para el año 2017, el correspondiente a **\$1,004,337,987.00 (mil cuatro millones trescientos treinta y siete mil novecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)**

En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento esta legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, no obran dentro de los archivos de la autoridad electoral registros de sanciones impuestas al Partido Revolucionario Institucional pendientes de pago.

De lo anterior se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del referido partido político, pues aun cuando tuviere la obligación de pagar sanciones, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que se establecen en el presente Acuerdo.

6. Que en tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución identificada como **INE/CG808/2016**, correspondiente al Partido Revolucionario Institucional por lo que hace al Comité Ejecutivo Nacional, este Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis relativo a las consideraciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, por lo que se procederá a la valoración de la documentación presentada por el partido incoado, misma que corresponde al Considerando **18.1, inciso b), conclusión 18** de la resolución en cita.

7. Que en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada en el expediente **SUP-RAP-10/2017**; a continuación se analiza la documentación presentada como anexo en cada una de las cuarenta y seis pólizas materia de la conclusión 18, modificándose el Dictamen Consolidado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.

Antecedente Conclusión 18, Dictamen Consolidado.

Al respecto, la observación tuvo como origen la verificación de la cuenta “*Transferencias a Fundaciones o Institutos de Investigación*”, subcuenta “*En especie*”, en la cual se observaron gastos que no cumplían con la totalidad de documentación establecida en el Reglamento de Fiscalización para acreditar la comprobación de los mismos.

Consecuente con lo anterior, previa notificación, el partido político dio respuesta a los oficios de errores y omisiones (INE/UTF/DA-F/20378/16 e INE/UTF/DA-F/21509/16 de 31 de agosto y 6 de octubre, respectivamente, ambos de dos mil dieciséis) mediante escritos SFA/025/16 de 14 de septiembre y SFA/032/1 de 13 de octubre, ambos de 2016.

Tal, como se observa a continuación:

“(…)

49. De la verificación a la cuenta ‘Transferencias a Fundaciones o Institutos de Investigación’, subcuenta ‘En especie’, se observaron erogaciones que se encuentran soportadas con el comprobante de pago respectivo; sin embargo, carecen del comprobante que cumpla con los requisitos fiscales; los casos en comento se detallan en el Anexo 1 del oficio número INE/UTF/DA-F/20378/16.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-F/20378/16 de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por su partido el mismo día.

Con escrito de respuesta núm. SFA/025/16, recibido el 14 de septiembre de 2016, el PRI manifestó lo que a la letra se transcribe:

‘Por lo que respecta a esta observación en apartado 30, se remiten 132 pólizas de egresos anexa a su comprobante de pago que corresponden al mes de enero mismas que se detallan en el anexo 1 de Oficio INE/UTF/DA-F20378/16, recibo interno de entrega-recepción, así como 50 recibos CFDI de honorarios asimilables a sueldos en original por el periodo 01 al 31 de enero de 2015.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que contrario a lo expresado por la autoridad los recibos CFDI sí reúnen los requisitos fiscales establecidos por el artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, en correlación con el artículo 99 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como las Reglas: 2.7.5.2 y 2.7.5.3 de la Resolución Miscelánea tanto para 2015 como para 2016 publicada la primera en el Diario Oficial de la Federación el martes 30 de diciembre de 2014 y la segunda el miércoles 23 de diciembre de 2015, éstas últimas refieren la parte especial con la que se debe cumplir en cuanto a los CFDI requisitos que son (CFDI impreso):

- I. El folio fiscal.*
- II. La clave en el RFC del empleador.*
- III. La clave en el RFC del empleado.*

Con lo anterior, esa autoridad podrá cerciorarse que los recibos que sustentan las operaciones pagadas cumplen a cabalidad con la totalidad de los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta así como las Resoluciones misceláneas anteriormente referidas, no olvidando que le son aplicables a los actos jurídicos las leyes vigentes en el momento en el que ocurren. En este sentido, es contradictorio lo observado respecto a que los recibos CFDI no cumplen con los requisitos fiscales, pues como ya quedó evidenciado los mismos cumplen con todas las especificaciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación, aunado a que no existe imposición alguna en el referido ordenamiento (Ley especial) que imponga un requisito fiscal por el que esa autoridad asegura los comprobantes fiscales en cuestión incumplen.

En virtud de las consideraciones vertidas con anterioridad, se solicita a la autoridad se tenga por subsanada la presente observación.’

Del análisis a la documentación presentada, se determinó lo siguiente:

Respecto de las pólizas señaladas con (1) en la columna "REF" del Anexo 1 del presente oficio, el PRI proporciono pólizas anexando copias de cheque y recibos CFDI, sin embargo, estos fueron expedidos el 6 de septiembre de 2016, por lo que no corresponden al ejercicio sujeto de revisión, es decir que no se podrán considerar para comprobar erogaciones del 2015, ya que de acuerdo a la normatividad aplicable los comprobantes fiscales digitales por internet deberán generarse a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a que haya tenido lugar la operación, acto o actividad que generó la obligación de expedirlo; o bien en función al número de trabajadores o asimilados a salarios, posteriores a la realización efectiva de dichos pagos, conforme a lo establecido en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, Sección 2.7.5 De la expedición de CFDI por concepto de nómina y otras retenciones. 2.7.5.3 Fecha de expedición y entrega de CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014.

En relación con las pólizas señaladas con (2) en la columna "REF" del Anexo 1 del INE/UTF/DA-F/21509/16 oficio, el PRI presentó las pólizas adjuntando copia simple del cheque, omitiendo proporcionar los comprobantes con requisitos fiscales.

Se le solicita presentar lo siguiente:

- *Las aclaraciones conducentes.*

Lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 18, 45, 46, 127, numeral 1, 150, numeral 1, 152 y 296, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; en relación con el artículo 99, fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 39 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; así como la Regla 2.7.5.3 de la Resolución Miscelánea para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 30 de diciembre de 2014.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-F/21509/16 de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por su partido el mismo día.

Con escrito de respuesta núm. SFA/032/16, recibido el 13 de octubre de 2016, el PRI manifestó lo que a la letra se transcribe:

*'Por lo que respecta a las pólizas señaladas con (2) en la columna de 'Ref' de su Anexo 1 al presente oficio en **Apartado 18**, se remiten nuevamente 46 pólizas de egresos anexas a su comprobante de pago, así como recibos CFDI de honorarios asimilados a sueldos en original por el periodo 01 al 31 de enero 2015 mismas que se detallan en relación anexa.*

Respecto a las pólizas señaladas con (1) en la columna "REF", es de señalar que la atribución de esta autoridad se constriñe en la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, dicha facultad, permite corroborar el origen de los recursos, que el monto, la aplicación y el destino de los mismos sea acorde con los fines de los partidos políticos, esto es, corrobora el adecuado manejo de los recursos.

Atendiendo a lo anterior, los partidos políticos tenemos la obligación de cumplir con el principio de transparencia, por lo que estamos obligados a presentar distintos tipos de informes, mediante los cuales damos a conocer el manejo de los recursos, asimismo, cumplimos con la obligación de permitir la práctica de auditorías y verificaciones, así como entregar la documentación que nos requieran respecto a nuestros ingresos y egresos.

Derivado de lo anterior, se concluye que lo que se busca a través del modelo de fiscalización es tener certeza y transparencia sobre el manejo de los recursos, esto es, esclarecer de dónde provienen los recursos que los partidos políticos poseen; cuál es el monto total de recursos que percibió durante el ejercicio en revisión; cuál es el monto total de recursos que erogó durante el mismo periodo, de esos recursos erogados, en qué los aplicó, es decir, qué actividades realizó, qué bienes muebles o inmuebles adquirió, etc., y a quién le realizó los pagos.

La anterior reflexión sirve para aclarar a esta autoridad que, los gastos que amparan los recibos fueron registrados y realizados en el momento en el que se efectuaron, tal como lo establece el Reglamento de Fiscalización, lo anterior derivado de la naturaleza de los mismos, puesto que al tratarse de erogaciones por concepto de nóminas resulta claro que es prioridad para el partido hacerlos en tiempo, lo anterior considerando que es una de las principales obligaciones del partido político en su calidad de patrón realizar los pagos por concepto de nómina a sus trabajadores, situación que queda evidenciada con la documentación que obra en poder de la autoridad.

Lo anterior se robustece al considerar que dichos pagos generaron retenciones hechas por el partido tales como Impuesto Sobre la Renta (ISR) o por Seguridad Social (IMSS), etc., que se enteraron con oportunidad a las instituciones correspondientes, situación que quedó evidenciada oportunamente en la contabilidad del partido.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que contrario a lo afirmado por la autoridad los recibos CFDI sí reúnen los requisitos fiscales establecidos por el artículo 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, en correlación con el artículo 99 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como las Reglas: 2.7.5.2 y 2.7.5.3 de la Resolución Miscelánea tanto para 2015 como para 2016 publicada la primera en el Diario Oficial de la Federación el martes 30 de diciembre de 2014 y la segunda el miércoles 23 de diciembre de 2015, éstas últimas refieren la parte especial con la que se debe cumplir en cuanto a los CFDI, requisitos que son (CFDI impreso):

- I. El folio fiscal.*
- II. La clave en el RFC del empleador.*
- III. La clave en el RFC del empleado.*

Con lo anterior, esa autoridad podrá cerciorarse que los recibos que sustentan las operaciones pagadas cumplen a cabalidad con la totalidad de los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta así como las Resoluciones Misceláneas anteriormente referidas, no olvidando que le son aplicables a los actos jurídicos las leyes vigentes en el momento en el que ocurren. En este sentido, es contradictorio lo observado respecto a que los recibos CFDI no cumplen con los requisitos fiscales, pues como ya quedó evidenciado los mismos cumplen con todas las especificaciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación.

En el mismo sentido, contrario a lo afirmado por la autoridad, este partido considera que para efectos del objetivo perseguido por la autoridad fiscalizadora, la fecha de emisión del comprobante fiscal no debe tener tanto peso como para considerar que se vulneran los bienes jurídicos protegidos por la norma, toda vez que se debe considerar que existe evidencia fehaciente del método de pago y de las cuentas a las que fue a parar el recurso, asimismo de que la retención de impuestos fue realizada y enterada debidamente.

Debemos recordar que se considera que los contribuyentes que expidan CFDI por los pagos de salarios, tendrán por cumplidos los requisitos de deducibilidad de dichos comprobantes, al momento que se realice el pago de dichas remuneraciones, con independencia de la fecha en que se haya emitido el CFDI o éste haya sido certificado.

Resulta un hecho notorio que los comprobantes fiscales corresponden al 2016, sin embargo, eso no quiere decir que no cumplan con los requisitos fiscales y menos aún, que no podamos comprobar las erogaciones relativas a pago de salarios de 2015, con los mismos. En este sentido, el código fiscal no precisa el momento exacto en el que el contribuyente adquiere esta obligación y tampoco la fecha límite para hacerlo.

No pasa desapercibido para este partido que el reglamento de dicho código, en su artículo 39 establece que los contribuyentes deberán remitir al Servicio de Administración Tributaria o al proveedor de certificación, según sea el caso, el comprobante fiscal digital por Internet, a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a que haya tenido lugar la operación, acto o actividad de la que derivó la obligación de expedirlo.

Es decir, después de realizar el pago, el contamos con veinticuatro horas para hacer llegar la información al Servicio de Administración Tributaria (o al proveedor de facturación) para que:

- *Valide que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.*
- *Le asigne el folio UUID.*
- *Le incorpore el sello digital del SAT*

A su vez, el proveedor de facturación (Proveedor Autorizado de Certificación), cuenta con un plazo de setenta y dos horas para poder validar que la información contenida en el comprobante cumpla con lo establecido en la ley.

Lo que nos ayuda a comprender que dicha disposición se refiere al plazo con que cuentan los patrones o prestadores de bienes y servicios, para remitir al Servicio de Administración Tributaria o al Proveedor de Certificación de CFDI, el comprobante fiscal digital por internet para que le asignen el folio y le incorporen el sello digital del SAT, pero no se pronuncia respecto del plazo que tienen los patrones y proveedores de bienes o servicios para poner a disposición de sus trabajadores o clientes el CFDI.

Por otro lado, respecto a la Resolución Miscelánea Fiscal, es de señalar que se entiende por ésta como el conjunto de disposiciones fiscales emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establecen disposiciones de carácter general agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento a los contribuyentes; no generan obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales, lo anterior de conformidad con el inciso g) del numeral 1 del artículo 35 del Código Fiscal de la Federación.

Por su parte, el artículo 35 del código en comento establece que, los funcionarios fiscales facultados debidamente podrán dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan

obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

Esto es, en el orden jerárquico de las disposiciones fiscales, una regla de esta Resolución no puede ni debe establecer mayor carga o confusión de lo que las leyes o cualquier otro ordenamiento de su naturaleza hayan establecido. En caso de que así sea, como contribuyentes tenemos todo el derecho de ignorar dicha regla por completo y apegarnos a lo que las leyes determinen.

Establecido lo anterior, resulta idóneo concluir que la miscelánea establece la **potestad** al contribuyente, en este caso este partido político, de ejercer la opción de emitir CFDI en las fechas referidas, tal y como se desprende de la transcripción íntegra de la referida Resolución:

‘Fecha de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores

2.7.5.3. Para los efectos del artículo 27, fracciones V, segundo párrafo y XVIII y 99, fracción III de la Ley del ISR en relación con el artículo 29, segundo párrafo, fracción IV del CFF y 39 del Reglamento del CFF, los **contribuyentes podrán expedir los CFDI** por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios, antes de la realización de los pagos correspondientes, o dentro del plazo señalado en función al número de sus trabajadores o asimilados a salarios, posteriores a la realización efectiva de dichos pagos, conforme a lo siguiente:

Número de trabajadores o asimilados a salarios	Día hábil
De 1 a 50	3
De 51 a 100	5
De 101 a 300	7
De 301 a 500	9
Más de 500	11

En cuyo caso, considerarán como fecha de expedición y entrega de tales comprobantes la fecha en que efectivamente se realizó el pago de dichas remuneraciones.

Los contribuyentes que realicen pagos por remuneraciones a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios, correspondientes a periodos menores a un mes, podrán emitir a cada trabajador o a cada contribuyente asimilado un sólo CFDI mensual, dentro del plazo señalado en el primer párrafo de esta regla posterior al último día del mes laborado y

efectivamente pagado, en cuyo caso se considerará como fecha de expedición y entrega de tal comprobante la fecha en que se realizó efectivamente el pago correspondiente al último día o periodo laborado dentro del mes por el que se emita el CFDI.

Los contribuyentes que opten por emitir el CFDI mensual a que se refiere el párrafo anterior, deberán incorporar al mismo el complemento a que se refiere la regla 2.7.5.1., por cada uno de los pagos realizados durante el mes, debidamente requisitados. El CFDI mensual deberá incorporar tantos complementos como número de pagos se hayan realizado durante el mes de que se trate.

En el caso de pagos por separación o con motivo de la ejecución de resoluciones judiciales o laudos, los contribuyentes podrán generar y remitir el CFDI para su certificación al SAT o al proveedor de certificación de comprobantes según sea el caso, a más tardar el último día hábil del mes en que se haya realizado la erogación, en estos casos cada CFDI se deberá entregar o poner a disposición de cada receptor conforme a los plazos señalados en el primer párrafo de esta regla, considerando el cómputo de días hábiles en relación a la fecha en que se certificó el CFDI por el SAT o proveedor de certificación de CFDI.

En el CFDI mensual a que se refiere esta regla se deberán asentar, en los campos correspondientes, las cantidades totales de cada uno de los complementos incorporados al mismo, por cada concepto, conforme a lo dispuesto en la Guía de llenado del Anexo 20 que al efecto publique el SAT en su página de Internet. No obstante lo señalado, los contribuyentes deberán efectuar el cálculo y retención del ISR por cada pago incluido en el CFDI mensual conforme a la periodicidad en que efectivamente se realizó cada erogación.

La opción a que se refiere esta regla no podrá variarse en el ejercicio en el que se haya tomado, y es sin menoscabo del cumplimiento de los demás requisitos que para las deducciones establecen las disposiciones fiscales.

CFF 29, LISR 27, 99, RCFF 39, RMF 2015 2.7.5.1.”

En conclusión, debemos dejar en claro que, si bien todos los contribuyentes deben emitir comprobantes fiscales por las operaciones que realicen (y no hacerlo sí amerita una sanción o multa) ni el código, ni las leyes que regulan los impuestos como son el ISR, el IVA o el IEPS precisan el momento en que deben expedirlo.

En dichos ordenamientos tampoco se establece que el plazo pueda ser fijado por la autoridad fiscal; si la autoridad impone una multa por haber

emitido el comprobante una vez transcurridas 24 horas previstas en el artículo 39 del Reglamento CFF, es evidente que el contribuyente podrá impugnarla, pues dicha disposición resulta ilegal, ya que, violenta del principio de legalidad al estar basándose en un reglamento para sancionar, toda vez que sigue sin establecerse con precisión cuál es el plazo para que los proveedores de bienes o servicios pongan a disposición de sus clientes el CFDI.

Por último y de acuerdo a la normatividad en materia fiscal y electoral en la cual se sustenta la conducta en comentó, es posible determinar que no existe precepto o argumento jurídico que establezca de forma directa o indirecta la obligación de emitir los comprobantes fiscales durante la anualidad en la cual se hubiese llevado a cabo la prestación del servicio; es decir, la emisión de cualquier tipo de comprobante de naturaleza fiscal no se encuentra supeditado a una norma que exija que la temporalidad con la cual se cuenta para realizar la expedición de los referidos comprobantes es un año calendario.

Cabe señalar que de acuerdo con el principio general del derecho que versa: “Lo que no está prohibido está permitido” y tal como se ha señalado en el párrafo que antecede al no existir prohibición alguna de llevar a cabo la emisión de algún comprobante fiscal no se estaría vulnerando la legislación.

Aunado a lo anterior, esta autoridad no debe perder de vista que, en todo caso, no resulta la autoridad facultada para sancionar dicha situación, toda vez que carece de competencia para pronunciarse al respecto.”

Del análisis a las aclaraciones proporcionadas, se determinó lo siguiente:

(...)

*En relación con las pólizas señaladas con (2) en la columna de “Referencia” del **Anexo 2** del presente Dictamen, el PRI omitió presentar los comprobantes con requisitos fiscales por \$440,766.66, por tal razón, la observación se considera no atendida.*

*En consecuencia, al omitir presentar los comprobantes con requisitos fiscales por \$440,766.66, el PRI incumplió con lo dispuesto en el artículo 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. **(Conclusión final 18)**
(...)”*

Bajo esta tesitura, en la conclusión final 18 del Dictamen Consolidado, se determinó lo siguiente.

“(…)

5.1.5 Conclusiones finales del informe

(…)

18. PRI. El partido omitió presentar comprobantes con requisitos fiscales por \$440,766.66.

Tal situación constituye, a juicio de esta Unidad Técnica de Fiscalización un incumplimiento a lo establecido en los artículos 127 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

(…)”

Como se advierte, la autoridad electoral consideró que el Partido Revolucionario Institucional en la contabilidad del Comité Ejecutivo Nacional, omitió presentar los comprobantes con requisitos fiscales (recibos por concepto de honorarios asimilados a sueldos) que comprobaran los egresos realizados por un importe de \$440,766.66. (Cuatrocientos cuarenta mil setecientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.)

Consecuente con lo anterior, en la Resolución **INE/CG808/2016**, considerando **18.1.1, inciso b)**, Resolutivo **PRIMERO**, ésta autoridad, previa individualización, impuso al instituto político una sanción consistente en:

“(…)

b) 1 falta de carácter sustancial o fondo: conclusión: 18

*Una multa equivalente a **6,033** (seis mil treinta y tres) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2016, misma que asciende a la cantidad de **\$440,650.32** (cuatrocientos cuarenta mil seiscientos cincuenta pesos 32/100 M.N.).*

(…)”

Recurso de apelación SUP-RAP-10/2017.

Al resolver el medio de impugnación interpuesto por el apelante, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó declarar **fundado** el agravio hecho valer por el partido recurrente, únicamente por lo que respecta a la conclusión 18 materia de observación.

En este contexto, el instituto político sostuvo que la documentación correspondiente a las 46 pólizas si se entregó a la autoridad responsable, por lo que autoridad jurisdiccional previo análisis¹, observó la presentación del escrito SFA/032/2016 y como consecuencia de la presentación, la autoridad responsable elaboró el “*ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS MEDIANTE OFICIO INE/UTF/DA-F/21509/16 POR LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DEL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2015, en la que se precisa que la documentación entregada se detalla en el Anexo 1.*”

En el Anexo 1 del acta entrega-recepción, se presenta un cuadro que, en la fila que interesa, contiene los datos siguientes:

CARPETA	APARTADO	CONTENIDO
3/4	18	46 Pólizas con documentación soporte “

Consecuente con lo anterior, la Sala Superior consideró que la autoridad electoral no precisó la documentación presentada como anexo a cada una de las pólizas, al respecto señaló que la Unidad Técnica de Fiscalización debía detallar los anexos que recibió, es decir, el tipo de documentos y el total de fojas recibidas, mientras que el Consejo General tenía el deber de valorar los documentos entregados, cuestión que no se enfatizó.

Efecto

Se revocó la sanción correspondiente a la conclusión en comento, para efecto de que la autoridad responsable precise la documentación que le fue entregada por el partido político recurrente y emita una nueva determinación valorando tales constancias.

¹ La sentencia del recurso de apelación SUP-RAP-10/2017, puede ser consultada en la siguiente liga de internet: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0010-2017.pdf Por lo que hace al estudio de fondo, en específico lo concerniente a la Conclusión 18, se advierte a fojas 23-32 de la Sentencia.

Modificación en cumplimiento a lo ordenado en el recurso de apelación SUP-RAP-10/2017.

Sentencia	Conclusión	Efectos	Acatamiento
ÚNICO. Se revoca la sanción correspondiente a la conclusión 18 (dieciocho) de la resolución impugnada, para los efectos previstos en la parte final de esta ejecutoria.	18	Precisar la documentación que le fue entregada por el partido político recurrente y emita una nueva determinación valorando tales constancias.	Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado INE/CG807/2016 y la Resolución INECG/808/2016, por lo que hace a la conclusión 18, en los términos precisados en los considerandos 7 y 8 del presente Acuerdo.

Visto lo ordenado por la autoridad jurisdiccional, a continuación se valora la documentación presentada por el Partido Revolucionario Institucional mediante oficio SFA/032/2016, misma que se encuentra relacionada con el “*ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS MEDIANTE OFICIO INE/UTF/DA-F/21509/16 POR LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DEL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2015.*”

Documentación sujeta a análisis.

Bajo esta tesitura las “**46 pólizas con documentación soporte**” que refiere la Unidad Técnica de Fiscalización en el documento denominado como acta entrega-recepción señalada en el párrafo precedente, consta de lo siguiente:

- 46 pólizas contables en igual número de copias simples.
- 46 cheques en igual número de copias simples.
- 7 recibos de honorarios asimilados a sueldos en igual número de copias simples.

Para efecto de certeza, a continuación se detalla la documentación presentada.

No	REFERENCIA CONTABLE	NÚMERO DE CHEQUE	CONCEPTO DE LA PÓLIZA	MONTO	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		
					COPIA DE LA PÓLIZA	COPIA DEL CHEQUE	RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS
1	PE-39/01-15	2365	Ángeles Ángeles Luis Tf Especie Icadep	\$5,000.00	SI	SI	NO
2	PE-90/01-15	2418	Ángeles Ángeles Luis Tf Especie Icadep	\$10,000.00	SI	SI	NO

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-10/2017**

No	REFERENCIA CONTABLE	NÚMERO DE CHEQUE	CONCEPTO DE LA PÓLIZA	MONTO	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		
					COPIA DE LA PÓLIZA	COPIA DEL CHEQUE	RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS
3	PE-158/01-15	2484	Angeles Angeles Luis Tf Especie Icadep	\$5,000.00	SI	SI	NO
4	PE-83/01-15	2411	Arreguin Perea Alan Manuel Tf Especie Icadep	\$2,333.33	SI	SI	SI
5	PE-76/01-15	2404	Arroyo González María Guadalupe Tf Especie Icadep	\$4,166.67	SI	SI	SI
6	PE-40/01-15	2366	Cacheux Herrera Nadia Tf Especie Icadep	\$8,500.00	SI	SI	NO
7	PE-91/01-15	2419	Cacheux Herrera Nadia Tf Especie Icadep	\$16,291.66	SI	SI	NO
8	PE-159/01-15	2485	Cacheux Herrera Nadia Tf Especie Icadep	\$8,500.00	SI	SI	NO
9	PE-37/01-15	2363	Feliciano Olmedo Oliver Vicente Tf Especie Icadep	\$5,000.00	SI	SI	NO
10	PE-88/01-15	2416	Feliciano Olmedo Oliver Vincent Tf Especie Icadep	\$7,000.00	SI	SI	NO
11	PE-157/01-15	2483	Feliciano Olmedon Oliver Vincent Tf Especie Icadep	\$5,000.00	SI	SI	NO
12	PE-38/01-15	2364	Franco Fuentes Andrés Tf Especie Icadep	\$5,000.00	SI	SI	NO
13	PE-89/01-15	2417	Franco Fuentes Andrés Tf Especie Icadep	\$7,500.00	SI	SI	NO
14	PE-156/01-15	2482	Franco Fuentes Andrés Tf Especie Icadep	\$5,000.00	SI	SI	NO
15	PE-43/01-15	2369	García Ponce Juan Antonio Tf Especie Icadep	\$5,000.00	SI	SI	NO
16	PE-95/01-15	2423	García Ponce Juan Antonio Tf Especie Icadep	\$2,500.00	SI	SI	NO
17	PE-162/01-15	2488	García Ponce Juan Antonio Tf Especie Icadep	\$5,000.00	SI	SI	NO
18	PE-44/01-15	2370	Gómez González Maritey Tf Especie Icadep	\$4,400.00	SI	SI	NO
19	PE-96/01-15	2424	Gómez González Maritey Tf Especie Icadep	\$1,466.67	SI	SI	NO
20	PE-163/01-15	2489	Gómez González Maritey Tf Especie Icadep	\$4,400.00	SI	SI	NO
21	PE-50/01-15	2376	Ludlow Deloya Dunia Tf Especie Icadep	\$23,500.00	SI	SI	SI
22	PE-68/01-15	2394	Ludlow Deloya Dunia Tf Especie Icadep	\$45,000.00	SI	SI	
23	PE-139/01-15	2465	Ludlow Deloya Dunia Tf Especie Icadep	\$23,500.00	SI	SI	
24	PE-45/01-15	2371	Medellín Casas Gabriela Tf Especie Icadep	\$7,500.00	SI	SI	NO
25	PE-97/01-15	2425	Medellín Casas Gabriela Tf Especie Icadep	\$1,875.00	SI	SI	NO
26	PE-164/01-15	2490	Medellín Casas Gabriela Tf Especie Icadep	\$7,500.00	SI	SI	NO
27	PE-41/01-15	2367	Pacheco Cruz Francisco Tf Especie Icadep	\$1,500.00	SI	SI	NO
28	PE-92/01-15	2420	Pacheco Cruz Francisco Tf Especie Icadep	\$2,750.00	SI	SI	NO
29	PE-160/01-15	2486	Pacheco Cruz Francisco Tf Especie Icadep	\$1,500.00	SI	SI	NO
30	PE-42/01-15	2368	Pastrana Huerta Javier Alejandro Tf Especie Icadep	\$7,500.00	SI	SI	NO
31	PE-94/01-15	2422	Pastrana Huerta Javier Alejandro Tf Especie Icadep	\$3,500.00	SI	SI	NO
32	PE-161/01-15	2487	Pastrana Huerta Javier Alejandro Tf Especie Icadep	\$7,500.00	SI	SI	NO
33	PE-98/01-15	2396	Pulido García Georgina Adriana Tf Especie Icadep	\$23,333.33	SI	SI	NO

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-10/2017**

No	REFERENCIA CONTABLE	NÚMERO DE CHEQUE	CONCEPTO DE LA PÓLIZA	MONTO	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		
					COPIA DE LA PÓLIZA	COPIA DEL CHEQUE	RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS
34	PE-77/01-15	2405	Rodríguez Pérez Francisco Gerardo Tf Especie Icadep	\$9,500.00	SI	SI	SI
35	PE-70/01-15	2397	Rojas Prieto Osvaldo Enrique Tf Especie Icadep	\$26,250.00	SI	SI	SI
36	PE-4/01-15	2330	Silva Martin Carlos Francisco Tf Especie	\$15,000.00	SI	SI	NO
37	PE-46/01-15	2372	Silva Martin Carlos Francisco Tf Especie Icadep	\$15,000.00	SI	SI	NO
38	PE-165/01-15	2491	Silva Martin Carlos Francisco Tf Especie Icadep	\$15,000.00	SI	SI	NO
39	PE-49/01-15	2375	Trejo Del Toro Alan Herbert Tf Especie Icadep	\$10,500.00	SI	SI	NO
40	PE-87/01-15	2415	Trejo Del Toro Alan Herbert Tf Especie Icadep	\$21,000.00	SI	SI	NO
41	PE-155/01-15	2481	Trejo Del Toro Alan Herbert Tf Especie Icadep	\$10,500.00	SI	SI	NO
42	PE-36/01-15	2362	Vargas Flores Armando Tf Especie Icadep	\$3,750.00	SI	SI	NO
43	PE-86/01-15	2414	Vargas Flores Armando Tf Especie Icadep	\$7,500.00	SI	SI	NO
44	PE-154/01-15	2480	Vargas Flores Marco Armando Tf Especie Icadep	\$3,750.00	SI	SI	NO
45	PE-66/01-15	2392	Villanueva Vega Yatrib Danae Tf Especie Icadep	\$9,500.00	SI	SI	SI
46	PE-58/01-15	2384	Zúñiga Tapia Fernando Roberto Tf Especie Icadep	\$20,000.00	SI	SI	SI
TOTAL				\$440,766.66			

Valoración

Como se advierte en el cuadro que antecede, derivado de la valoración a la documentación anexa a las pólizas presentadas por el Partido Revolucionario Institucional se acreditó que en el caso de **nueve pólizas** se presentaron copias de los cheques correspondientes al pago y los comprobantes fiscales de las operaciones, es decir, los recibos CFDI de honorarios asimilados a salarios expedidos por los prestadores de servicios, los cuales comprueban el gasto realizado por el instituto político.

A continuación se detallan las operaciones en comento:

No	REFERENCIA CONTABLE	NÚMERO DE CHEQUE	CONCEPTO DE LA PÓLIZA	MONTO
4	PE-83/01-15	2411	Arreguin Perea Alan Manuel Tf Especie Icadep	\$2,333.33
5	PE-76/01-15	2404	Arroyo González María Guadalupe Tf Especie Icadep	\$4,166.67
21	PE-50/01-15	2376	Ludlow Deloya Dunia Tf Especie Icadep	\$23,500.00
22	PE-68/01-15	2394	Ludlow Deloya Dunia Tf Especie Icadep	\$45,000.00
23	PE-139/01-15	2465	Ludlow Deloya Dunia Tf Especie Icadep	\$23,500.00
34	PE-77/01-15	2405	Rodríguez Pérez Francisco Gerardo Tf Especie Icadep	\$9,500.00

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-10/2017**

No	REFERENCIA CONTABLE	NÚMERO DE CHEQUE	CONCEPTO DE LA PÓLIZA	MONTO
35	PE-70/01-15	2397	Rojas Prieto Osvaldo Enrique Tf Especie Icadep	\$26,250.00
45	PE-66/01-15	2392	Villanueva Vega Yatrib Danae Tf Especie Icadep	\$9,500.00
46	PE-58/01-15	2384	Zúñiga Tapia Fernando Roberto Tf Especie Icadep	\$20,000.00
TOTAL				\$163,750.00

Es trascendente señalar que respecto de las pólizas con número de referencia 21, 22 y 23, se encuentran amparadas por los cheques 2376; 2394 y 2465, montos que en conjunto suman el importe de **\$92,000.00 (noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.)** cantidad que es coincidente con el recibo de honorarios CFDI, expedido por Ludlow Deloya Dunia, por lo que se acredita la comprobación de los gastos registrados en la contabilidad del partido.

Visto lo anterior, así como de la valoración a la documentación restante se advirtió que el Partido Revolucionario Institucional, comprobó con la presentación de recibos CFDI por concepto de honorarios asimilados, las transferencias en especie registradas en **nueve pólizas contables**, por un importe de **\$163,750.00 (ciento sesenta y tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)** tal y como se puede observar el cuadro presentado en párrafos precedentes.

Por lo que hace a las **treinta y siete pólizas restantes**, una vez valorada la documentación en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se advirtió que en dichos casos presentó copia simple de las treinta y siete pólizas contables, con las respectivas copias simples de cheques.

No obstante lo anterior, la presentación de dicha documentación es insuficiente para tener por comprobado el gasto realizado por el partido político.

Al respecto, es preciso señalar la trascendencia de la presentación del recibo de honorarios como elemento principal para comprobar el concepto de gasto que se encuentra registrado en la contabilidad del partido, toda vez que la observación realizada por la responsable partió de la verificación a la cuenta "*Transferencia a fundaciones o Institutos de Investigación*", subcuenta "*Especie*".

En este contexto, el instituto político transfirió recursos que beneficiaron a fundaciones o institutos de investigación del mismo, los cuales registró como transferencias en especie, pues es el partido político quien registra contablemente

tanto el gasto del instituto de investigación, como el pago de los honorarios asimilados a salarios, reflejando los cheques expedidos por el Comité Ejecutivo Nacional del partido como un ingreso en especie.

Bajo esta tesitura el instituto político se encontraba obligado a presentar los recibos de honorarios asimilados a sueldos, en términos del artículo 132 del Reglamento de Fiscalización, el cual establece:

“Artículo 132.

Documentación de honorarios asimilables a sueldos y salarios

1. Los pagos que realicen los sujetos obligados, por concepto de honorarios asimilables a sueldos, recibirán el mismo tratamiento que las nóminas para efecto del pago y comprobación del gasto, asimismo deberán ser adjuntados al Sistema de Contabilidad en Línea.

2. Tales egresos deberán estar soportados con recibos foliados que especifiquen el nombre, la clave del RFC y la firma del prestador del servicio, el monto del pago, la fecha y la retención del impuesto sobre la renta correspondiente, el tipo de servicio prestado al partido o coalición y el periodo durante el cual se realizó, así como la firma del funcionario del área que autorizó el pago, anexando copia de la credencial para votar con fotografía del prestador del servicio.

(...)”

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en la aplicación de los recursos de los partidos políticos es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un partido político no compruebe el gasto registrado y por ende la aplicación de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al no presentar los recibos de honorarios que satisfaga cabalmente los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea convicción en la autoridad administrativa electoral sobre la comprobación de los recursos.

Situación que se vincula con la obligación establecida en el artículo 127, numeral 1 del Reglamento en cita, esto es, *“Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.”*

Al respecto es preciso mencionar que el CFDI o Comprobante Fiscal Digital por Internet, responde al modelo de factura Electrónica vigente en México desde

enero de 2011. Este tipo de comprobante utiliza estándares establecidos por el Servicio de Administración Tributaria y posee las siguientes características:

- **Integridad:** La información contenida en un CFDI no puede manipularse ni modificarse sin que se detecte.
- **Autenticidad:** La identidad del emisor del comprobante puede verificarse a través de su Certificado de Sello Digital.
- **Único:** Cada CFDI lleva registrado un identificador único otorgado por un Proveedor Autorizado de Certificación que lo convierte en único ante su destinatario y ante el Servicio de Administración Tributaria.
- **Verificable:** La persona que emite un CFDI no podrá negar haberlo hecho.

El CFDI es generado, transmitido y resguardado utilizando para ello medios electrónicos (representación digital); sin embargo, es la representación de lo que anteriormente constituía una factura o un recibo y de la misma manera, cumple con la función de avalar las operaciones comerciales y la prestación de servicios celebrada entre el comprador o contratante y el vendedor o prestador de servicios, comprometiéndolos a entregar el producto o servicio, así como a realizar el pago según lo especificado en dicho documento.

Cada factura electrónica emitida cuenta con un sello digital (Firma Electrónica Avanzada) que confirma su origen, le da validez ante el Servicio de Administración Tributaria y la hace única; también posee una cadena original que funciona como un resumen del contenido de la factura y un folio que indica el número de la transacción realizada del vendedor, sin importar que sea persona física o moral.

El CFDI es un documento que sirve para describir el costo de los servicios y desglosar los impuestos correspondientes a pagar al detalle; sustituye, según las disposiciones legales correspondientes en México, a las facturas tradicionales en papel y garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su origen o creación, además del contenido.

Aunado a lo anterior, el CFDI encuentra respaldo en las disposiciones legales aplicables, específicamente en el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal en la cual se establecen los elementos normativos y requisitos técnicos para cualquier persona física o moral que desee emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-10/2017**

Es importante destacar que el elemento que aporta validez a los comprobantes fiscales digitales es el archivo electrónico XML, por lo que la información contable se encuentra respaldada comúnmente, tanto de ingresos como egresos, con la impresión del comprobante que está anexo en formato PDF al correo electrónico que para tal efecto los contribuyentes utilizan.

No obstante, el instituto político omitió presentar la documentación con los requisitos fiscales que comprobara el gasto realizado, esto es, los recibos CFDI de honorarios asimilados a sueldos en términos del artículo 132, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización; por lo que incumplió con lo establecido en el artículo 127, numeral 1 del Reglamento en cita por un importe \$277,016.66 (doscientos setenta y siete mil dieciséis pesos 66/100 M.N.).

Bajo esta tesitura, se advirtió que respecto de las treinta y siete pólizas (de cuarenta y seis materia de análisis) el partido omitió presentaron los comprobantes fiscales que ampararan las erogaciones realizadas.

Considerando lo anterior, el partido no comprobó erogaciones de treinta y siete pólizas por concepto de honorarios asimilados a sueldos registrados durante el ejercicio 2015 y reportados en el Informe Anual de dicho año, al no haber presentado los recibos CFDI de honorarios asimilados. A continuación se detallan las operaciones en comento:

No	REFERENCIA CONTABLE	NÚMERO DE CHEQUE	CONCEPTO DE LA PÓLIZA	MONTO
1	PE-39/01-15	2365	Ángeles Ángeles Luis Tf Especie Icadep	\$5,000.00
2	PE-90/01-15	2418	Ángeles Ángeles Luis Tf Especie Icadep	\$10,000.00
3	PE-158/01-15	2484	Ángeles Ángeles Luis Tf Especie Icadep	\$5,000.00
6	PE-40/01-15	2366	Cacheux Herrera Nadia Tf Especie Icadep	\$8,500.00
7	PE-91/01-15	2419	Cacheux Herrera Nadia Tf Especie Icadep	\$16,291.66
8	PE-159/01-15	2485	Cacheux Herrera Nadia Tf Especie Icadep	\$8,500.00
9	PE-37/01-15	2363	Feliciano Olmedo Oliver Vicente Tf Especie Icadep	\$5,000.00
10	PE-88/01-15	2416	Feliciano Olmedo Oliver Vincent Tf Especie Icadep	\$7,000.00
11	PE-157/01-15	2483	Feliciano Olmedon Oliver Vincent Tf Especie Icadep	\$5,000.00
12	PE-38/01-15	2364	Franco Fuentes Andrés Tf Especie Icadep	\$5,000.00
13	PE-89/01-15	2417	Franco Fuentes Andrés Tf Especie Icadep	\$7,500.00
14	PE-156/01-15	2482	Franco Fuentes Andrés Tf Especie Icadep	\$5,000.00
15	PE-43/01-15	2369	García Ponce Juan Antonio Tf Especie Icadep	\$5,000.00
16	PE-95/01-15	2423	García Ponce Juan Antonio Tf Especie Icadep	\$2,500.00
17	PE-162/01-15	2488	García Ponce Juan Antonio Tf Especie Icadep	\$5,000.00
18	PE-44/01-15	2370	Gómez González Maritey Tf Especie Icadep	\$4,400.00
19	PE-96/01-15	2424	Gómez González Maritey Tf Especie Icadep	\$1,466.67
20	PE-163/01-15	2489	Gómez González Maritey Tf Especie Icadep	\$4,400.00
24	PE-45/01-15	2371	Medellín Casas Gabriela Tf Especie Icadep	\$7,500.00
25	PE-97/01-15	2425	Medellín Casas Gabriela Tf Especie Icadep	\$1,875.00
26	PE-164/01-15	2490	Medellín Casas Gabriela Tf Especie Icadep	\$7,500.00

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-10/2017**

No	REFERENCIA CONTABLE	NÚMERO DE CHEQUE	CONCEPTO DE LA PÓLIZA	MONTO
27	PE-41/01-15	2367	Pacheco Cruz Francisco Tf Especie Icadep	\$1,500.00
28	PE-92/01-15	2420	Pacheco Cruz Francisco Tf Especie Icadep	\$2,750.00
29	PE-160/01-15	2486	Pacheco Cruz Francisco Tf Especie Icadep	\$1,500.00
30	PE-42/01-15	2368	Pastrana Huerta Javier Alejandro Tf Especie Icadep	\$7,500.00
31	PE-94/01-15	2422	Pastrana Huerta Javier Alejandro Tf Especie Icadep	\$3,500.00
32	PE-161/01-15	2487	Pastrana Huerta Javier Alejandro Tf Especie Icadep	\$7,500.00
33	PE-98/01-15	2396	Pulido García Georgina Adriana Tf Especie Icadep	\$23,333.33
36	PE-4/01-15	2330	Silva Martín Carlos Francisco Tf Especie	\$15,000.00
37	PE-46/01-15	2372	Silva Martín Carlos Francisco Tf Especie Icadep	\$15,000.00
38	PE-165/01-15	2491	Silva Martín Carlos Francisco Tf Especie Icadep	\$15,000.00
39	PE-49/01-15	2375	Trejo Del Toro Alan Herbert Tf Especie Icadep	\$10,500.00
40	PE-87/01-15	2415	Trejo Del Toro Alan Herbert Tf Especie Icadep	\$21,000.00
41	PE-155/01-15	2481	Trejo Del Toro Alan Herbert Tf Especie Icadep	\$10,500.00
42	PE-36/01-15	2362	Vargas Flores Armando Tf Especie Icadep	\$3,750.00
43	PE-86/01-15	2414	Vargas Flores Armando Tf Especie Icadep	\$7,500.00
44	PE-154/01-15	2480	Vargas Flores Marco Armando Tf Especie Icadep	\$3,750.00
TOTAL				\$277,016.66

Consecuentemente, se concluye que el monto involucrado de la conclusión 18 visible en el cuerpo del Dictamen Consolidado por lo que hace al Comité Ejecutivo Nacional, disminuye de la cifra originalmente determinada, la cual correspondió a **\$440,766.66**.

Para quedar en el monto de **\$277,016.66 (doscientos setenta y siete mil dieciséis pesos 66/100 M.N.)**, conforme lo analizado en párrafos anteriores, incumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. (Conclusión 18 del Dictamen)

Modificación a la conclusión final del Dictamen Consolidado.

18. PRI. El partido omitió presentar comprobantes con requisitos fiscales por **\$277,016.66**.

Tal situación constituye, a juicio de esta Unidad Técnica de Fiscalización un incumplimiento a lo establecido en los artículos 127 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

8. En este orden de ideas, toda vez que la autoridad jurisdiccional dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG808/2016, este Consejo General únicamente se abocará a modificar la parte conducente de la individualización de la sanción, relativa al Considerando **18.1, inciso b), conclusión 18**, de conformidad con lo establecido en el considerando precedente.

Visto lo anterior, se modifica la individualización de la sanción para quedar en los términos siguientes:

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente **SUP-RAP-05/2010**, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción

que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.²

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el **SUP-RAP-98/2003** y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Por lo que hace a la conclusión referida observada en el Dictamen Consolidado se identificó que la conducta desplegada por el instituto político corresponde a la omisión consistente en comprobar los gastos realizados durante el ejercicio 2015.

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señala la irregularidad cometida por el partido político

Descripción de la irregularidad observada
18. El partido omitió presentar comprobantes con requisitos fiscales por \$277,016.66

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron

Modo: El instituto político cometió una irregularidad al no comprobar los gastos realizados.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2015.

² En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización, ubicadas en Avenida Acoxta, número 436, Colonia Ex hacienda Coapa, Tlalpan, C.P. 14300 en la Ciudad de México en el marco de la revisión de los informes anuales correspondientes al gasto ordinario de 2015.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de la normatividad transgredida.

Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por la omisión de presentar ante la autoridad fiscalizadora la documentación comprobatoria de los gastos realizados a lo largo del ejercicio 2015, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido de mérito viola los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

En este orden de ideas se desprende que en la conclusión **18**, el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, mismo que se transcribe a continuación:

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 127

Documentación de los egresos

*1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
(...)”*

El artículo transcrito impone a los sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los gastos de los sujetos obligados a fin de que pueda verificar con seguridad que cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los gastos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

En ese entendido, al no presentar documentación soporte que compruebe sus gastos, el sujeto obligado resultó indebidamente beneficiado en términos de las reglas establecidas para el manejo de su financiamiento.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que

el hecho de que un partido político no presente la documentación con la que compruebe el destino y aplicación de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al no presentar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el destino y aplicación lícita de los recursos.

Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad y administración de los partidos políticos, conducen a la determinación de que la fiscalización de los gastos que reciben por concepto de financiamiento no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino.

De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el periodo fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el partido político, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.

Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que la falta de documentación soporte que deba ir acompañada con los registros contables del partido político trae como consecuencia la falta de comprobación de los gastos realizados.

En ese entendido, el partido tuvo un gasto no comprobado en tanto que la obligación de comprobar los gastos emana del Reglamento de Fiscalización, el cual tutela la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas del origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, mismos que tienden a evitar que por la omisión de comprobar los gastos reportados, se presenten conductas ilícitas o que permitan conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el partido político infractor vulneró la hipótesis normativa prevista en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.

En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los partidos políticos, tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente **SUP-RAP-188/2008**, señaló que en las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, esto es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en peligro el bien protegido para entender consumada la infracción o ilícito descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la

razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada en la conclusión **18** es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben conducir los partidos políticos en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de comprobar los gastos efectuados para el desarrollo de sus fines.

En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en **una falta de fondo**, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener certeza y transparencia en la rendición de cuentas respecto de los recursos erogados por el partido infractor.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el instituto político cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. Como se expuso en el inciso d), se trata de una falta, la cual vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 443, numeral 1, inciso l) del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es imponer una sanción.

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

1. Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el instituto político se califica como **GRAVE ORDINARIA**.³

Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en la que se vulnera directamente el principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas del partido, toda vez que el sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte de los gastos realizados durante el ejercicio 2015, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de relevancia para el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y la correcta comprobación del uso de los recursos de los partidos políticos.

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las irregularidades que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

³ En ese contexto, el ente político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

Debe considerarse que el hecho de que el ente no cumpla con la obligación de comprobar con la documentación soporte correspondiente los gastos que realizó durante un periodo establecido, impidió que la autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos recursos. Por lo tanto, no debe perderse de vista que la conducta descrita vulnera directamente el principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos con que cuenta el partido político.

En ese tenor, la falta cometida por el partido es sustantiva y el resultado lesivo es significativo, toda vez que omitió comprobar los egresos realizados durante el ejercicio 2015, situación que, como ya ha quedado expuesto, vulnera el principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el ente infractor no es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.⁴

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los

⁴ Al efecto, la Sala Superior estimó mediante **SUP-RAP-454/2012** que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 5** del presente acatamiento, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

“I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley;

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.

Conclusión 18

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.

- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$277,016.66** (doscientos setenta y siete mil dieciséis pesos 66/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de conductas cometidas por el partido político.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que la sanción contenida en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del sujeto obligado infractor, una **amonestación pública** sería poco idónea para disuadir la conducta infractora como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una **reducción de la ministración mensual** del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción prevista en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia del presente procedimiento.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidad de Medida y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen

mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos.⁵

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción a imponer debe ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que las mismas son clasificables como grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de **omitir comprobar el gasto** y la norma infringida (127 del Reglamento de Fiscalización), la singularidad y el objeto de la sanción a imponer, que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al instituto político debe ser igual al monto del beneficio obtenido, en razón **de la trascendencia de las normas trasgredidas al omitir comprobar el egreso**, lo cual ya ha sido analizado previamente, por lo que procede sancionar al partido político, con una sanción económica equivalente al **100%** (cien por ciento) sobre el monto involucrado, el cual asciende a un total de **\$277,016.66** (doscientos setenta y siete mil dieciséis pesos 66/100 M.N.)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a **3,668** (tres mil seiscientos sesenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2017, misma que

⁵ Criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como **SUP-RAP-89/2007**.

**CONSEJO GENERAL
SUP-RAP-10/2017**

asciende a la cantidad de **\$276,897.32** (doscientos setenta y seis mil ochocientos noventa y siete pesos 32/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

9. Que en atención a las consideraciones precedentes, a continuación se presenta la sanción originalmente impuesta al Partido Revolucionario Institucional en la Resolución **INE/CG808/2016**, Punto Resolutivo **PRIMERO**; así como las modificaciones procedentes en términos de lo razonado en el presente Acuerdo.

Resolución INE/CG808/2016			Acuerdo por el que se da cumplimiento		
Conclusión	Monto involucrado	Sanción	Conclusión	Monto involucrado	Sanción
18. El partido omitió presentar comprobantes con requisitos fiscales por \$440,766.66	\$440,766.16	Una multa equivalente a 6,033 (seis mil treinta y tres) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2016, misma que asciende a la cantidad de \$440,650.32 (cuatrocientos cuarenta mil seiscientos cincuenta pesos 32/100 M.N.).	18. El partido omitió presentar comprobantes con requisitos fiscales por \$277,016.66	\$277,016.66	Una multa equivalente a 3,668 (tres mil seiscientos sesenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2017, misma que asciende a la cantidad de \$276,897.32 (doscientos setenta y seis mil ochocientos noventa y siete pesos 32/100 M.N.).

10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en los considerandos 7 y 8 del presente Acuerdo, se modifica la sanción impuesta originalmente en la resolución **INE/CG808/2016**, considerando **18.1.1 inciso b)**, Punto Resolutivo **PRIMERO**, inciso **b)**, para quedar en los términos siguientes:

b) 1 falta de carácter sustancial o fondo: conclusión: 18

Una multa equivalente a **3,668** (tres mil seiscientos sesenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 2017, misma que asciende a la cantidad de **\$276,897.32** (doscientos setenta y seis mil ochocientos noventa y siete pesos 32/100 M.N.).

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado INE/CG807/2016 y la Resolución **INE/CG808/2016**, Considerando **18.1.1**, inciso **b)**, Punto Resolutivo **PRIMERO**, inciso **b)** aprobados en sesión extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, con relación a las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión del Informe Anual de ingresos y gastos del Partido Revolucionario Institucional por lo que hace al Comité Ejecutivo Nacional, correspondiente al ejercicio dos mil quince, en los términos precisados en los Considerandos **7, 8 y 10** del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SUP-RAP-10/2017** dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente, remitiéndole para ello las constancias atinentes.

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

CUARTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la sanción determinada se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo quede firme; los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta, será destinada al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables.

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 28 de junio de 2017, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**